

**Asamblea General**

Distr. general
25 de septiembre de 2012

Original: español

Sexagésimo séptimo período de sesiones

Tema 45 del programa

Cuestión de las Islas Malvinas (Falkland Islands)

Carta de fecha 19 de septiembre de 2012 dirigida al Secretario General por el Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de transmitir adjunta (véase el anexo) la respuesta del Gobierno argentino a la réplica británica (A/66/706) a la presentación argentina realizada el pasado 10 de febrero sobre la militarización británica del Atlántico Sur y publicada como documento A/66/696-S/2012/86.

Le agradecería que tuviera a bien disponer que la presente carta y su anexo se distribuyan como documento de la Asamblea General en relación con el tema 45 del programa, relativo a la Cuestión de las Islas Malvinas.

(Firmado) Mateo **Estremé**
Ministro Encargado de Negocios interino



Anexo de la Carta de fecha 19 de septiembre de 2012 dirigida al Secretario General por la Misión Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas

La República Argentina tiene el honor de dirigirse al Secretario General de las Naciones Unidas para referirse a la carta que le remitió el Representante Permanente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones Unidas el 22 de febrero de 2012, y distribuida como documento A/66/706.

La República Argentina constata que el Reino Unido no consigue refutar, y en varios pasajes de su respuesta incluso reconoce, que ese país es el único responsable de la militarización que ha generado en el Atlántico Sur.

El Secretario de Defensa del Reino Unido, Sr. Philip Hammond, ha reconocido públicamente que la Argentina no tiene intención de realizar acciones militares, ni las capacidades militares para intentar retomar las Islas y que por otra parte, no posee la menor información de inteligencia que sugiera la existencia de una amenaza creíble por parte de la República Argentina respecto de las Islas Malvinas. Ese reconocimiento del funcionario responsable en el Reino Unido de todos los temas de defensa permite contrastar el absurdo inherente a las afirmaciones vertidas por ese mismo país en el documento A/66/706, donde sostiene que ha militarizado las Islas Malvinas con propósitos exclusivamente defensivos frente a la amenaza continua que pretende atribuir a la Argentina.

Desde la recuperación de la democracia en la Argentina en 1983, ningún observador sensato de la realidad política y militar del Atlántico Sur podría argumentar seriamente que la Argentina constituye una amenaza militar, o que haya tenido actitudes susceptibles de justificar la militarización propugnada por el Reino Unido que se materializa en la adopción de distintas acciones unilaterales de carácter hostil y que constituyen una amenaza para la seguridad de la región. Por solo mencionar algunas de esas acciones unilaterales, sirven de ejemplo las siguientes:

a) La jerarquización de la base militar de Monte Agradable, al trasladarse a esta el Comando británico para el Atlántico Sur. En este caso, y como oportunamente se ha hecho notar en la correspondiente nota de protesta, se advierte que dicha base extiende su ámbito operacional a espacios que exceden el área disputada. Por otra parte, dicha base posee un importante centro de comando y control y una base de inteligencia electrónica que permite monitorear el tráfico naval y aéreo de la región, facilitando el despliegue militar británico a escala global. Dicha base cuenta además con dos pistas aéreas transcontinentales y una dotación de aviones de combate de quinta generación, los *Eurofighters Typhoon*, equipados con poderosos misiles crucero capaces de alcanzar gran parte del Cono Sur, tecnología que denota la intención británica de incrementar su poderío militar en el Atlántico Sur;

b) La realización de ejercicios militares con lanzamiento de misiles en el Atlántico Sur, oportunamente denunciada por la República Argentina ante la Organización Marítima Internacional por entender que los citados ejercicios constituyen una violación por parte del Reino Unido de las obligaciones internacionales asumidas en dicho foro, toda vez que los mismos ponen en riesgo la seguridad de la navegación en el Atlántico Sur;

c) El aumento de la capacidad militar de obtención y exploración electrónica, con la instalación de un sistema de radares que conforman un sistema de defensa aéreo activo, el cual podría estar siendo empleado para ejecutar tareas de vigilancia, reconocimiento y control marítimo y aéreo de una amplia zona del Atlántico Sur y Sudamérica; el aumento de las capacidades militares de superficie con el envío del destructor *HMS Dauntless*, tecnológicamente muy superior a las fragatas allí destacadas hasta el momento; el aumento de las capacidades militares aéreas, el aumento de las capacidades militares terrestres en ejercitaciones de operaciones conjuntas y el aumento de la capacidad de transporte militar estratégico;

d) El envío de un submarino nuclear al Atlántico Sur, con capacidad para introducir armamento nuclear en la zona. En este sentido cabe advertir que la introducción de armas nucleares en el Atlántico Sur es una contradicción al Tratado de Tlatelolco, del cual el Reino Unido es parte y cuyo fin es la desnuclearización militar de América Latina; y

e) La creación de un episodio mediático en torno al envío a las Islas Malvinas del Príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión al trono británico, en su condición de alto oficial de las fuerzas armadas, para realizar ejercicios aeronavales, acciones éstas que constituyen una provocación y que son rechazadas por la República Argentina.

La República Argentina observa con preocupación el gran número de efectivos militares desplegados en las Islas Malvinas y la proporción que éstos representan en relación con su población civil. En este sentido, se advierte que mientras la población civil alcanza los 3.000 habitantes, se encuentran desplegados en las Islas Malvinas entre 1.500 y 2.000 efectivos militares británicos. Por otra parte, el presupuesto que asigna el Reino Unido a la defensa de las Islas Malvinas no se vería afectado por la revisión de los gastos de defensa y seguridad implementada por el Primer Ministro David Cameron.

Este incremento sistemático del potencial militar ofensivo británico en el Atlántico Sur lamentablemente tiene lugar en un contexto caracterizado por la obstinada negativa británica a reanudar las negociaciones sobre soberanía y es además contrario a lo dispuesto en la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que solicita a ambas partes que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación de las Islas Malvinas mientras se encuentre pendiente de solución la controversia de soberanía.

Anteriormente el Reino Unido esgrimía una serie de argumentos relativamente variados para tratar de sostener su posición frente a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Sin embargo, en la actualidad se limita a alegar un hipotético derecho de libre determinación de los pueblos como si éste fuera aplicable a la población que ese país implantó en las Islas Malvinas. Es lamentable que el Reino Unido argumente que el incremento de la militarización en el Atlántico Sur tenga por objetivo proteger un pretendido derecho de libre determinación de esa población y que supedite la reanudación de las negociaciones a la voluntad de ésta. La Asamblea General de las Naciones Unidas desde hace varias décadas ha reconocido que la Cuestión de las Islas Malvinas se encuadra en una de las formas de colonialismo, de lo que resulta que su población actual es colonial, como también lo es el régimen

político que el Reino Unido pretende aplicar en los archipiélagos disputados. La libre determinación de los pueblos no es la consagración del libre antojo de los colonos, sino todo lo contrario. La libre determinación jamás fue concebida como una herramienta para que los colonos intenten perpetuarse en la ocupación de un territorio que no les pertenece, y esa es precisamente la forma en que el Reino Unido pretende aplicar ese principio. No es casual que la comunidad internacional se haya limitado a pedir a las dos únicas partes en esta disputa de soberanía que tengan presentes los intereses de la población de las Islas en los pronunciamientos de la Asamblea General. En otros casos de descolonización, en los cuales verdaderamente existe un pueblo titular del derecho a la libre determinación, la comunidad internacional recurrió a diversas formas de consulta de la voluntad de ese pueblo. No lo hizo en la Cuestión de las Islas Malvinas porque allí no existe un pueblo cuya voluntad tenga incidencia en la solución de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. La liberación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur del régimen colonial al que están sujetas es una cuestión pendiente.

La contradicción es una constante en las afirmaciones contenidas en la nota británica reproducida en el documento A/66/706.

El Reino Unido sostiene que la Argentina se niega a cooperar en materia de medidas de fomento de la confianza en el Atlántico Sur. Sin embargo, ha sido precisamente el Reino Unido el que ha mantenido por más de una década la negativa a la realización de reuniones del Grupo de Trabajo del Atlántico Sur, cuya finalidad es crear confianza y evitar incidentes en la esfera militar. La creciente militarización británica de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes contrarían, además, el objeto y fin de los acuerdos bilaterales celebrados en materia de medidas de fomento de la confianza en el orden militar y ponen serios obstáculos a la continuidad de la cooperación en tal esfera.

Las medidas británicas mencionadas se suman a una larga serie de acciones unilaterales que el Reino Unido viene llevando a cabo en el área disputada en contravención a la mencionada resolución 31/49. No se puede comprender cómo el Reino Unido puede sostener que la Argentina habría cesado en la cooperación bilateral en diferentes temáticas vinculadas con el Atlántico Sur, cuando fue precisamente a causa de actos unilaterales británicos que resultó imposible continuar con dicha cooperación.

La Argentina recuerda que la cooperación en materia pesquera en el Atlántico Sur se ha visto imposibilitada por sucesivos actos unilaterales británicos, como lo fueron el establecimiento de pretendidas jurisdicciones marítimas alrededor de las Islas Malvinas en 1986 y 1990, y alrededor de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur en 1993, la venta de licencias de pesca desde 1987, el levantamiento unilateral en 1994 de la prohibición total temporaria de pesca estipulada en el área descripta en el anexo de la Declaración Conjunta del 28 de noviembre de 1990 y en el área al oeste de aquélla y la instauración en 2005 de un régimen de atribución a 25 años de cuotas de captura de recursos pesqueros en aguas circundantes a las Islas Malvinas, medida que constituye una forma de disposición ilícita y unilateral a largo plazo de recursos pesqueros en los espacios marítimos disputados.

En el mismo sentido, la Argentina recuerda que la decisión adoptada en 2007 de dar por terminada la Declaración Conjunta sobre Cooperación sobre Actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental, obedeció a diferencias de interpretación

respecto del ámbito espacial de cooperación y a reiteradas actividades unilaterales desarrolladas por el Reino Unido en contra de lo convenido en ese instrumento.

En lo que concierne a la realización de vuelos chárter y al vuelo regular que semanalmente opera Lan Chile hacia las Islas Malvinas, invocado por el Reino Unido en su nota de fecha 27 de enero de 2012, es de lamentar que el Gobierno británico omita considerar seriamente la propuesta que la Argentina le ha formulado con la intención de revisar la situación actual en lo concerniente a comunicaciones aéreas entre la Argentina continental y las Islas Malvinas.

Mientras el Reino Unido persista en desconocer las obligaciones que el derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas, le imponen en su condición de parte en la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, la Argentina no tiene más remedio que adoptar medidas orientadas a tutelar sus derechos sobre sus recursos naturales en el ámbito de su jurisdicción interna. La Argentina ya ha explicado a la contraparte británica que dichas normas, que incluyen el Decreto 256/2010, son conformes al derecho internacional, incluido el derecho internacional del mar.

Resulta asimismo necesario aclarar que todos los compromisos adoptados por los países integrantes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), constituyen una expresión de la voluntad soberana de cada uno de los Estados que lo integran, los cuales guardan conformidad con el derecho internacional y con la legislación de cada uno de ellos. En este contexto, resulta necesario recordar que la medida del MERCOSUR que el Reino Unido invoca en su nota del 27 de enero del 2012 ha sido adoptada por todos sus Estados miembros respecto de una bandera que no es considerada lícita.

Por último, la Argentina rechaza por carecer de todo fundamento la insinuación británica que atribuye carácter militar a algunas bases argentinas en la Antártida. El Tratado Antártico prevé mecanismos efectivos de control del cumplimiento de sus disposiciones, que prohíben el establecimiento de bases militares en la Antártida. El Reino Unido debería recurrir a esos mecanismos si su insinuación fuera seria. Pero no lo ha hecho, porque esa insinuación ha sido formulada sin fundamento y al solo efecto de distraer la atención del verdadero problema que plantea para la Argentina y la región su constante y creciente militarización del Atlántico Sur.

La República Argentina reafirma sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que forman parte de su territorio nacional.